

Participación de la Sociedad civil en la discusiones temáticas de la CND
(Octubre de 2019)

Mariana Souto Zabaleta - Argentina

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM)

Mi nombre es Mariana Souto Zabaleta, soy argentina, y coordinadora del Grupo de Estudio sobre Prevención y Control del Narcotráfico en el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Hace más de veinte años que trabajo en temas vinculados a las políticas de control del narcotráfico en Argentina, tanto desde diversas funciones que he asumido en el estado nacional, como en la academia y en organizaciones de la sociedad civil. Las apreciaciones que siguen, si bien se apoyan en mi experiencia en el análisis de los mercados ilícitos de drogas y en el impacto de las políticas de control en Argentina, resultan aplicables a la mayoría de los países aquí representados.

Los progresos en la implementación de los compromisos asumidos para contrarrestar el problema mundial de las drogas que se señalan en la Declaración Ministerial, finalmente, no han impactado de manera efectiva frente a la inocultable expansión y diversificación de los mercados ilícitos de drogas. Este fracaso nos obliga de manera urgente a repensar la forma en la que se ha venido analizando el problema de las drogas enfocándolo desde una perspectiva de mercado y avanzando en una serie de direcciones.

En primer lugar, en el desarrollo de investigaciones empíricas sobre los mercados ilícitos de drogas y de nuevos indicadores para una mejor apreciación de sus dimensiones, características y dinámicas. Se debe, además, orientar el foco analítico hacia una medición del impacto efectivo que las políticas de control tienen sobre esos mercados. En segundo lugar, en el rediseño de los sistemas nacionales de información y los procesos multilaterales de relevamiento y análisis de datos. Finalmente, en el fortalecimiento de la interacción con la academia y las organizaciones de la sociedad civil, aprovechando el vasto desarrollo de investigaciones empíricas que ellas vienen impulsando desde hace varios años.

Con relación al fortalecimiento de la investigación en el área de los mercados ilícitos y al desarrollo de nuevos indicadores, no hay dudas que el conocimiento adquirido al momento es importante pero insuficiente. Lo disponible no nos ha permitido una evaluación profunda de esos mercados ni del impacto concreto de las políticas de control. El reconocimiento de la necesidad de que las políticas se sustenten en evidencia debe plasmarse en la construcción de sistemas de información que permitan dar cuenta de los resultados y el impacto de cada una de las líneas de acción que se desarrollan nacional, regional e internacionalmente. Las estimaciones de los diferentes mercados ilícitos así como el análisis de sus características y dinámicas particulares son esenciales para ajustar las estrategias y apreciar su efectividad en el corto, mediano y largo plazo.

Para el logro de lo anterior es imprescindible mejorar el proceso de construcción de datos y los sistemas de información tanto a nivel nacional como multilateral. Hasta el momento, las evaluaciones realizadas han priorizado los aspectos formales y no nos han permitido avanzar en la dirección correcta. Reconocemos que el fortalecimiento de los sistemas de información es un enorme desafío, pero estamos convencidos de que sólo de esta forma estaremos en condiciones de reorientar recursos de un modo más efectivo hacia aquellas políticas que aseguren mejores resultados.

Desde la perspectiva de la demanda, el relevamiento de información debería ampliarse de modo de incluir todos aquellos aspectos que arrojan luz sobre el mercado y que incluyan datos sobre el consumo en sus diversas intensidades, cantidades y calidades, así como del gasto. Desde la perspectiva de la oferta, sabemos también hace muchísimo tiempo que los datos de incautaciones son sólo indicadores indirectos y, como tales, insuficientes. Necesitamos poder diferenciar los niveles del mercado en los que tienen lugar, y mejorar los relevamientos de precios y calidades en función de los mencionados niveles. Por otra parte, nos urge conocer los resultados concretos de la persecución policial y judicial, y como impacta ésta en la expansión y la diversificación de cada mercado en particular. Debemos además evaluar los propios daños causados tanto por los mercados como por las políticas implementadas. En definitiva, debemos estar en condiciones de responder si las actuales estrategias han mejorado las condiciones de vida de las personas involucradas en o impactadas por esos mercados.

Finalmente, estamos convencidos de que esta compleja pero ineludible tarea sólo es factible si se establecen sinergias con el mundo de la academia y con las organizaciones de la sociedad civil que impulsan el desarrollo de investigaciones empíricas sobre las diferentes dimensiones del problema mundial de las drogas. Es mucho lo que ellas tienen para aportar al proceso de mejora de la recolección de datos y el análisis de los mercados ilícitos. Su involucramiento debe ir más allá de las instancias formales. No podemos una vez más llegar a una nueva evaluación de los progresos realizados con la triste conclusión de que las herramientas de recolección de datos utilizadas son insuficientes para ello. Las estrategias de prevención y control sin sustento en la evidencia son políticas sin rumbo que necesariamente conducen al dispendio de los recursos estatales y multilaterales.

Un compromiso internacional en el que la academia, la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional toda se involucren en un trabajo cooperativo, nos asegurará mejores diagnósticos y respuestas más efectivas. Mayores esfuerzos nacionales, regionales e internacionales son necesarios para un estudio más profundo de los mercados ilícitos. Sin lugar a dudas, ello contribuirá de manera significativa a la evaluación de los esfuerzos realizados, al diseño e implementación de políticas basadas en buena evidencia y, sobre todo, a la reasignación de recursos hacia aquellas políticas que demuestren tener un impacto más alentador.